

El rastro de los cómplices de Olmedo López y los nuevos chats del escándalo

“Las pruebas hasta ahora apuntan a un hecho delictivo: que el dinero que yo mismo y el Congreso destinó a soportar el país en la peor sequía vivida fue en gran parte hurtado por quienes dirigieron la UNGRD”.

A esa conclusión llegó el propio presidente Gustavo Petro, el viernes pasado, después de que se conocieron nuevas piezas de la investigación por la corrupción que estalló en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que golpea a su propio gobierno en su segundo año de mandato.

En efecto, en la antesala de la instalación de la nueva legislatura del Congreso empezaron a circular chats en los que se menciona a su exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como presuntos articuladores de jugosos contratos en la UNGRD que se habrían canjeado por apoyos de congresistas a los proyectos de ley del Gobierno.

El patrón y los asesores

Horas después de la publicación del Presidente, fiscales delegados ante la Corte y miembros de la Dijín llegaron a hacer visitas a la propia Casa de Nariño, a las carteras del Interior y Hacienda, a la Consejería para las Regiones y al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).

Además de recoger información sobre el presunto direccionamiento de contratos, están rastreando la desaparición de datos que manejaban en sus computadores exasesores de los altos funcionarios del Gobierno que han salido salpicados en el escándalo.

Una de ellas es Sandra Ortiz, otrora poderosa consejera para las regiones que fue apartada del Gobierno luego de ser señalada como la emisaria para entregarle 3.000 millones de pesos al saliente presidente del Senado, Iván Name, ambos de la Alianza Verde.

Los computadores de sus asesores, Diana Durán y Ricardo Castiblanco (quien la acompañaba a la UNGRD), terminaron sin memoria RAM y disco duro.

Lo que llama la atención del propio Gobierno es que ahora no aparece el computador de María Alejandra Benavides Soto, la asesora del ministro Bonilla, quien aparece en chats preguntado por tres jugosos proyectos en la UNGRD.

“En los tres casos de pérdida de datos hay un mismo patrón. Y en el de Benavides se supo que una columna tapa la cámara de seguridad que podría revelar si alguien se llevó su PC”, le dijo a EL TIEMPO una fuente del alto Gobierno.

Los cómplices y Navidad

Lo que es claro, incluso para el propio Presidente, es que en el saqueo de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, su segundo a

Alcaldes revivieron e inflaron obras con la UNGRD. Piden chequear convenio impulsado por Sandra Ortiz en Arauca. Al Gobierno le preocupa la pérdida de datos de computadores de exasesores.



UNIDAD INVESTIGATIVA

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM | @UinvestigativaET



De izq. a der., Carlos Ramón González, de la DNI; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. FOTO: PRESIDENCIA

bordo, no son los únicos implicados.

“No dudo que tengan cómplices, incluso políticos”, señaló el presidente Petro.

EL TIEMPO investigó y estableció que los tres proyectos por los que andaban preguntando afanosamente asesores ministeriales –en El Salado (Bolívar), Saravena (Arauca) y Cotorra (Córdoba), por 92.000 millones de pesos– hicieron parte de un plan milimétrico.

Este diario tiene pruebas de que, al menos en los proyectos El Salado y Cotorra, se revivieron proyectos que habían sido presentados en el gobierno Duque.

Pero, faltando 14 días para que se acabaran los periodos de los mandatarios de turno, recibieron llamadas de la UNGRD para que los presentaran de nuevo por el doble del monto.

En efecto, el 18 de diciembre de 2023, en plenas fiestas de fin de año, el entonces alcalde de Cotorra, Guillermo Llorente (Coalición Cambio Radical, Conservador, partido de ‘la U’, Alianza verde y el Polo) informó que el drenaje para destaponar un canal pasó de 25.000 millones de pesos a 47.000 millones de pesos.

Ese mismo día, Carlos Torres, alcalde de El Carmen de Bolívar (por Cambio Radical y Centro Democrático) recibió un chat de Sneyder Pinilla en el que habla del proyecto de El Salado, para la construcción de la vía

principal que se había frenado en el gobierno Duque y que ahora ascendía a 12.356 millones de pesos. EL TIEMPO revela el chat que Pinilla le envió al alcalde, y hay otros con más mandatarios (ver el tiempo.com).

Pava y el asesor clave

Ese mismo mecanismo, el de resucitar viejos proyectos a última hora, se repitió en 8 regiones del país, y los mandatarios locales y congresistas involucrados aparecen en la lista de 17 personas que entregaron Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En la cartera de Hacienda le dijeron a EL TIEMPO que el ministro Bonilla y su equipo legal están tranquilos porque, tras analizar los señalamientos en su contra, no hallaron nada diferente al normal desarrollo de las relaciones entre esa cartera y la UNGRD.

De hecho, de todos los funcionarios mencionados, el presidente Petro salió a defender a su ministro de Hacienda. Y el apoderado de Bonilla es Javier Torres, de la oficina de Mauricio Pava, apoderado del Presidente y de Laura Sarabia.

Pero la justicia tendrá que aclarar por qué un asesor clave del Dapre le estaba preguntando a Sneyder Pinilla, mano derecha de Olmedo López, por esos contratos, advirtiendo que estaban en riesgo créditos de la Nación y pasándole el contacto de Bonilla.

Se trata de Jaime Ramírez Cobo, quien está en el Dapre desde el 27 de agosto de 2022, en las administraciones de Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González y, ahora, Laura Sarabia.

Su nombre se escuchó por primera vez el primero de junio pasado, cuando EL TIEMPO reveló que él y su pareja, Daniela Andrade Valencia (exfuncionaria de Fiduprevisora), aparecían en una cadena de WhatsApp en la que se los señalaba de ocupar esos cargos por su cercanía con Laura Sarabia, una de las funcionarias a las que se le atribuye más poder en este gobierno.

‘No trabaja para mí’

También se lo cataloga como amigo de Andrés Sarabia (hermano de Laura Sarabia), también mencionado en los wasaps.

Esos mensajes cobraron relevancia cuando la primera dama, Verónica Alcocer, denunció ante la Fiscalía que la intentaban vincular al escándalo de la UNGRD y que esa cadena de mensajes estaba articulada por un sector de Gobierno.

Y hace 48 horas EL TIEMPO publicó un audio en el que Carolina Martínez, asesora de Olmedo López, señala que Jaime Ramírez Cobo era el enlace del Carlos Ramón González y de Luis Fernando Velasco con el Congreso. Además, que Ramírez Cobo andaba preguntando por los contratos en Sara-

vena, Cotorra y El Salado.

Al respecto, Velasco le dijo a EL TIEMPO que ese asesor no trabajaba para él.

El otro giro y Sandra

Además de defender a Bonilla, el presidente Petro se pronunció sobre la versión de Olmedo López de que se le había pedido entregar contratos para financiar al Eln y a la ‘paz total’.

El Presidente negó categóricamente ese señalamiento y aseguró que López busca una rebaja de pena.

En similar sentido se pronunció la representante a la cámara por Arauca –curul de paz– Karen Manrique. Ella es una de 9 congresistas a los que la Fiscalía pidió in-

tegrar dentro de este caso.

Olmedo López dice que en su libreta Manrique escribió contratos que debía adelantar la UNGRD y los nombres de los parlamentarios beneficiados.

Manrique negó esos señalamientos y, de paso, cualquier nexo con aportes que beneficiarían al Eln (ver nota anexa). De hecho, el propio Olmedo López dijo que los contratos de la tabla no se alcanzaron a ejecutar porque estalló el escándalo de los carrotaques.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que se va a pedir que se indague otra millonaria inversión en Arauca en la que aparecen Olmedo López, la representante Karen Manrique y Sandra Ortiz.

‘Ya se entregó un 90 %’

Se trata de un convenio, firmado el 20 de noviembre de 2023, entre la UNGRD y la petrolera canadiense Parex Resources, Colombia.

El anuncio del convenio lo hizo Ortiz dentro del programa Obras por Impuestos y ascendió a 84.640 millones de pesos en maquinaria amarilla para cinco municipios: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Ese día estuvieron presentes Karen Manrique; Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, y un representante del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente (ver video eltiempo.com).

El proyecto tomó relevancia porque Parex (asociada de Ecopetrol, con la que acaba de hacer un hallazgo prometedor de un pozo) había tenido que suspender trabajos por amenazas del llamado frente de guerra Oriental del Eln, en 2023.

Y el Movimiento Político de Masas Social y Popular había rechazado (en 2022) las sindicaciones del comandante del frente 28 de las Farc que buscó vincularlos con el Eln.

EL TIEMPO se comunicó tanto con Parex como con Raúl Delgado (político pastuso), quienes coincidieron en el avance del convenio.

“De los equipos y vehículos ya se ha entregado el 95 por ciento. Lo pendiente corresponde a una camabaja ya tres bulldozers que están en alistamiento”, aseguró Rafael Pinto, vicepresidente ejecutivo de Parex, que aportó el 100 por ciento del presupuesto del convenio.

Delgado, por su parte, señaló que ese proyecto no ha tenido un trato diferente a los otros 235 convenios, por más de 1,7 billones de pesos, que han beneficiado a 205 municipios: “No hemos tenido en la ART gestión de algún parlamentario”.

Sin embargo, personas vinculadas al proyecto admitieron que la presencia de Ortiz, Pinilla y López le podría hacer daño.

Estos dos últimos están citados a imputación de cargos y medida de aseguramiento el 25 de julio por el caso de los carrotaques.

Pero las otras líneas de investigación del caso hasta ahora comienzan.

GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República de Colombia



“Las pruebas hasta ahora apuntan a un hecho delictivo: que el dinero que se destinó a soportar la peor sequía fue en gran parte hurtado por quienes dirigieron la UNGRD”.